

Comentario al documento de Osvaldo Meloni
“Does Poverty Relief Spending Reduce Crime? Evidence From Argentina”
 Presentado en la XLVIIª Reunión Anual de la AAEP
 (Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", Trelew, 2012)
Enrique A. Bour (FIEL, UBA)

*It is the foreign element that commits our crimes.
 There is no native criminal class except Congress*
More Maxims of Mark Twain, Johnson, 1927

1. Un trabajo de Bourguignon (1999) incluye los siguientes datos estadísticos:

Crime rates by region, 1985–95 (number of crimes per 100,000 inhabitants, regional means, rounded figures)

Region	Number of Countries	Major robberies	Intentional homicide
Africa	8	36	5
Asia	10	13	5
LAC	17	201	14
Eastern Europe and Central Asia	15	28	7
Western Europe	16	54	4
United States	1	249	7

Los promedios de los países latinoamericanos y del Caribe son, como puede apreciarse, extremadamente altos tomando como referencia los estándares internacionales. Si bien la tasa de criminalidad se ha ido reduciendo en forma progresiva en los Estados Unidos en los últimos años, ha ido aumentando en forma continua en la mayoría de los países sudamericanos. Con respecto al costo económico que esto significa, el mismo autor obtuvo la conclusión siguiente:

“Summing all these components leads to a social cost of crime equal to 3.8 per cent of GDP in the United States and a stunning 7.5 per cent in Latin America. Although both figures are rough, their order of magnitude is probably about right. As noted, by world standards the countries covered by this analysis have very high crime rates. In most European and Asian countries the same calculation would likely result in figures below 2 per cent of GDP.”

Para el periodo relevado, el índice de criminalidad de Argentina (denotado como la tasa cada 100,000 habitantes) fue, con todo, uno de los más reducidos (índice de 5, similar a Costa Rica, frente a 10 de Venezuela, 20 de México y Brasil y con el caso excepcional de Colombia, con un máximo de 66).

Estas cifras alertan acerca del enorme costo económico que puede tener la actividad ilegal en un sistema económico. Por tal motivo, trabajos como éste y el de otros autores presentados en esta Reunión Anual de la AAEP son bienvenidos por arrojar luz sobre un tópico descuidado por las políticas públicas. Meloni se propuso en este documento estudiar el impacto del llamado Plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), lanzado por el Gobierno nacional, operativo entre 2002 y 2005 para paliar los efectos sociales de la crisis económica asociada con la ruptura del régimen de tipo de cambio fijo a fines de 2001.

2. Desde las contribuciones de Becker (1968) y Ehrlich (1976) la teoría económica se ha ocupado de tratar en forma exhaustiva el problema de la decisión criminal como un problema más de oferta y demanda. Por ejemplo, Becker (1993) indica lo siguiente: *La racionalidad implica que algunos individuos se hacen criminales por las recompensas*

económicas del crimen comparadas con el trabajo legal, tomando en cuenta la probabilidad de aprehensión, convicción y la severidad del castigo.

3. La teoría económica del crimen, y en particular los tests de hipótesis en ese campo, son tópicos harto difíciles, pese a los progresos de las últimas décadas. Para tener una idea somera de los desafíos que representan, consideremos los siguientes aspectos.

3.1. La posibilidad misma de formular hipótesis significativas en el campo, donde abundan las relaciones de simultaneidad. Por ejemplo, Niskanen (1996) nos recuerda que *el bienestar es al mismo tiempo consecuencia y causa de diversas condiciones que pueden ser descritas mejor como patologías sociales, como la dependencia, la pobreza, los hijos extramatrimoniales, desempleo, aborto, y crimen violento. La hipótesis básica con que trabajamos es que la dependencia y otras patologías están **conjuntamente determinadas** y se derivan a su vez de un conjunto dado de otras condiciones.* Esto conduce a que algunos aspectos considerados por Meloni presenten cierta simultaneidad entre variables dependientes e instrumentos, para lo cual deberían ser usadas técnicas que permitan resolver el sesgo de simultaneidad.

3.2 Suelen presentarse grandes problemas de medición, que interactúan con dificultades de especificación. Vuelvo a citar a Niskanen (1996), que afirma que *el crimen violento es la patología social más seria en Estados Unidos. La tasa de crímenes violentos ha crecido en forma sustancial por varias décadas y es muy superior a la de otros países. Y la cantidad de crímenes violentos estimados mediante encuestas de victimización es muy superior al número informado por la policía.* La situación es similar a la planteada en las cuentas nacionales, plagada de problemas derivados de la **actividad no registrada**. Y piensen que estoy poniendo como referencia a Estados Unidos: si agregamos el factor de corrupción, el caso argentino debería ser *prima facie* mucho más complejo: la corrupción es un problema institucionalizado en todos los niveles de gobierno y dentro de la sociedad. Esta situación no sólo implica costos para la víctima, sino también ventajas para el delincuente pues sabe que, aunque lo capturen, podrá pagar un soborno, reduciendo así el castigo. Con esto, la delincuencia se hace relativamente “más barata”, por lo cual aumenta. La corrupción hace que la probabilidad de aprehensión, convicción y ejecución de sentencia sea más reducida pues la autoridad corrupta no castigará; de esta manera la probabilidad de castigo es baja, el costo esperado de la sanción es menor y habrá mayor actividad delictiva. Por otro lado, existe el dilema de que al aumentar el costo esperado de la sanción se incrementan los incentivos para realizar otras conductas ilícitas, con negociaciones al margen de la ley entre el infractor y la autoridad.

3.3 Meloni ha estimado las relaciones de la ecuación (1), a saber

$$Crime_{it} = \beta_0 + \beta_1 Crime_{it-1} + \beta_2 RELIEF_{it} + \beta_3j CONTROLS_{jit} + \varepsilon_{it}$$

En esta ecuación, i es el índice de la jurisdicción (provincia) y t representa al tiempo (en semestres). $Crime$ corresponde a las distintas opciones criminales, y la variable $RELIEF$, que es la variable independiente clave, es el número promedio de beneficiarios del PJJHD, en cada distrito y cada semestre. Mi primera sugerencia es que el análisis puede ganar mucho en sencillez tomando, en lugar de las variables originales, sus correspondientes logaritmos, a fin de estimar elasticidades. Segundo, desde el punto de vista económico tanto $Crime$ como $RELIEF$ son variables de cantidad. Pero el tamaño de esta última ha ido disminuyendo con la pérdida del poder adquisitivo de los planes. En tales condiciones, hubiera sido atinado medir el subsidio en términos reales recibidos por los desempleados, además del efecto cantidad. Y no hay que olvidar que el análisis supone causalidad desde $RELIEF$ del mismo período a $Crime$, pero ¿por qué no trabajar con la hipótesis alternativa de causalidad inversa? Como se subraya en la **Table 3** extraída del documento de Niskanen (1996),

1. **The level of violent crime is strongly related to welfare dependency.** A 1 percent increase in the welfare dependent population increases the violent crime rate by about **0.6 percent**.

Table 3				
Abortion and Violent Crime				
	<u>Abortion</u>		<u>Violent Crime</u>	
	TS	LS	TS	LS
<i>Effect of a 1 Percent Increase</i>				
Dependency			.61	
			(.16)	
Non-employment	1.65			
	(.34)			
Income	1.03	1.42	-1.33	
	(.22)	(.16)	(.64)	
<i>Effect of a 1 Percentage Point Increase</i>				
Benefits		1.22		1.12
		(.24)		(.46)
Education	3.61			
	(.99)			
Metropolitan			.83	1.25
			(.37)	(.37)
Minority			1.27	
			(.43)	
Black	1.77	1.76		3.83
	(.41)	(.32)		(.66)
Hispanic	1.21	.82		1.91
	(.16)	(.15)		(.37)

R ² weighted	.99	.99	.99	.99
unweighted	.44	.56	.59	.64

2. **An increase in welfare benefits indirectly increases the violent crime rate by increasing the number of welfare dependents.** An increase in AFDC benefits by 1 percent of average income increases the violent crime rate by about **1.1 percent**.

3. **The level of violent crime is also related to the composition of the population,** reflecting both a direct effect and an indirect effect operating through the level of the welfare dependent population. A 1 percentage point increase in the metropolitan population increases the violent crime rate by about 1.3 percent. A 1 percentage point increase in the **black** population increases the violent crime rate by about 3.8 percent, and a 1 percentage point increase in the Hispanic population increases the violent crime rate by about 1.9 percent.

4. Llego ahora a la nómina de **controles**. Los que discutimos los trabajos que son presentados a veces no nos damos cuenta de que ciertos datos que tenemos en mente no están disponibles (o suponen un costo elevado de recopilación). Voy a hacer un recuento de algunas variables que, a mi juicio, deberían ser computadas. En todo caso, siempre queda la alternativa de esperar que su omisión no implique un sesgo. El último resultado del punto anterior sugiere que se debería intentar probar como control la incidencia del grado de **urbanización** sobre el crimen (aquí puede esperarse un efecto mixto, ya que mayor cantidad de residentes urbanos tiende a asociarse con familiares dependientes, dificultades de empleo, y crimen violento, pero también tiende a reducir la pobreza), el número de hijos **de madre soltera**,¹ el nivel **educativo** del grupo, y la cantidad de **efectivos policiales** (es posible que no tengan efecto sobre la tasa de criminalidad, de cualquier forma, y algún efecto sobre la tasa de robos). Una cuestión importante es el **mercado de los servicios policiales**. ¿De qué variables depende la demanda de estos servicios? Probablemente, de los salarios reales de los policías, de los recursos de la Policía, y de la tasa de criminalidad existente. ¿Cómo juega el nivel de **corrupción**?

5. Felicito a Osvaldo por este trabajo que mejora nuestra comprensión de un área crítica para el desarrollo económico. Y aunque el documento no está orientado hacia la decisión política, podemos citar de nuevo a Niskanen en cuanto a que *la mayor implicancia de políticas del estudio es que aún tenemos que avanzar un trecho largo para prevenir y controlar el crimen. A la espera de ello, es urgente avanzar hacia una profunda descentralización de esta área.*

Becker, Gary S., (1968) "Crime and punishment: an economic approach", Journal of Political Economy, Vol. 76: pp.169-217.

Becker, Gary S., (1993) Nobel Lecture: "The economic way of looking at behavior", Journal of Political Economy, Vol. 101: pp. 385-409.

¹ "Out-of-Wedlock births are the most rapidly increasing social pathology. On a national basis (in 1991), 29.2 percent of births were to single mothers, with a range from 14.3 percent in Utah to 65.9 percent in the District of Columbia. Since 1960, the illegitimacy rate has increased from 2.3 percent to 22 percent for whites and from 21.4 percent to 68 percent for blacks. **A substantial part of the current generation of inner city young people has grown up without a father**, a contributor to the increase in violent crime and the decline in school performance as well as to some of the pathologies addressed in this study". (Niskanen, 1996)

Bourguignon, Francois. *Crime, Violence, and Inequitable Development*, In Boris Pleskovic and Joseph E. Stiglitz (eds.) **Annual World Bank Conference on Development Economics 1999**, the World Bank, Washington D.C. 1999.

Ehrlich, I., (1996) "*Crime, punishment, and the market for offenses*", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 10: pp. 43-68.

Niskanen, William A. *Crime, Police, and Root Causes*, Cato Institute Policy Analysis No. 218, November 14, 1994.

Niskanen, William A. *Welfare and the Culture of Poverty*, *The Cato Journal*, 1996, Vol. 16, 1.